

**“CONFLICTO ENTRE EL DERECHO A LA  
INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE  
EXPRESION”**

- Dr. Agustín Ignacio Prado
- Colegio de Abogados de Lomas de Zamora
- Tomo: 146 Folio: 109
- Correo electrónico:  
estudiojuridico.agustinprado@gmail.com

**2024**

## **I- INTRODUCCION**

### **CONFLICTO ENTRE DERECHOS CONSTITUCIONALES**

El conflicto entre estos dos derechos humanos fundamentales lo vemos reflejado en la evolución histórica de los mismos. El derecho a la libertad de expresión es un derecho constitucional que surge y se desarrolla paralelamente con el avance del sistema de gobierno democrático inherente a dichas instituciones.

Por otro lado cuando hablamos de derecho a la intimidad, debemos hacer una diferencia con el término privacidad ya que son tratados como sinónimos pero existe diferencia entre ellos. Así como la libertad de expresión es inherente a la vida de las instituciones democráticas, no es menos cierto que la intimidad es inherente a la persona humana, y es esa protección de la vida privada la que debe ser estado garantizada por un estado de derecho de régimen democrático en toda sociedad.

Como se menciona anteriormente la protección de estos derechos humanos fundamentales la encontramos tanto en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de jerarquía Constitucional que forman parte de nuestra Constitución Nacional, como así también en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación y con anterioridad el Código Civil de Velez Sársfield.-

Este conflicto entre los diferentes derechos constitucionales lo vemos resolverse en diferentes fallos tanto en el orden nacional como internacional. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina a tomado diferentes criterios en cuanto a la supremacía de un derecho por sobre el otro a lo largo de nuestra historia

## **II- DESARROLLO**

Todo Estado de Derecho y el respeto de éste por los derechos fundamentales establecen una relación directa, ya que la existencia del primero implica tanto la existencia como el respeto de los segundos.

La magnitud e importancia internacional que tiene estos derechos se ve reflejada en las constituciones de los diferentes países y en las declaraciones supraconstitucionales que reconoce su enfatizada protección, instaurando todo un sistema de garantías para las violaciones que se produzcan. En los derechos humanos observamos que con frecuencia se produce un menoscabo del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, a pesar de su enfatizada protección, se ven desvirtuados con mucha frecuencia, sobre todo cuando se topan con otro derecho que reviste la misma protección jurídica, me refiero a la libertad de expresión, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, dispuesta en el art.14 de la Constitución Nacional.

La realización de un determinado derecho no se puede llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias, porque por su propia naturaleza los derechos fundamentales son derechos no absolutos, esto es, derechos limitados, o por lo menos, limitables<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ignacio Ara Pinilla, *Las Transformaciones de los derechos humanos*, Madrid, Ed. Tecnos, pág. 72.

Los medios de comunicación al realizar su actividad profesional en numerosas ocasiones se inmiscuyen en la esfera privada de los individuos, los cuales se consideran lesionados y vulnerados en sus derechos y es aquí donde se produce una controversia y conflicto de derechos, que en la mayoría de los casos termina siendo resuelto por el órgano judicial, encargado de dar una solución lo más acorde posible a las pretensiones de las partes.

Con el fin de alcanzar el conocimiento exacto del conflicto, debemos analizar los conceptos a tratar. El honor es aquel derecho que tiene toda persona a su buena imagen, nombre y reputación, de tal forma que todos tenemos derecho a que se nos respete, dentro de nuestra esfera personal cualquiera sea nuestra trayectoria vital, siendo un derecho único e irrenunciable propio de todo ser humano.

Por ejemplo, si se comercializa con unas fotos personales de la esfera privada, es posible un aprovechamiento económico de su intimidad o de la imagen de esa persona y ese aprovechamiento puede ser consentido o no. De forma que ante la vulneración de este derecho se puede entablar un proceso judicial con el fin de solicitar un resarcimiento por el daño moral producido por aquel que atenta en forma directa o indirectamente. Esto podemos verlo reflejado en el fallo “ Ponzetti de Balbín, Indalia c/Editorial Atlántida S.A. s/ daños y perjuicios ”.

Intimidad y honor son realidades intangibles cuya extensión viene determinada en cada sociedad y en cada momento histórico y cuyo núcleo esencial debe determinarlo el órgano del Poder Judicial. La vulneración de éstos derechos depende del ámbito donde ocurra, ya que la injuria es la ofensa al honor de una persona que está presente y que se puede hacer en privado, mientras que la difamación es la ofensa del honor de una persona que puede estar ausente, hecha ante otras o la publicación de hechos de menosprecio y rebajamiento ante la opinión pública que son falsos. En cuanto al menoscabo de la fama se requiere de dos elementos que son la difamación y el desmerecimiento en la consideración ajena.

Otro derecho relacionado con el honor es el derecho a la intimidad que en una sociedad democrática se considera como uno de los derechos fundamentales y de necesaria protección, porque permite el desarrollo íntegro de la personalidad.

Dentro del derecho a la intimidad debemos incluir el de reserva y el respeto a la vida privada, ya que el primero tiene por finalidad la protección de la difusión y revelación de los datos pertenecientes a la vida privada; y el segundo tiene como objeto la protección contra intromisiones en ese espacio.

La tendencia legislativa en esta materia es resguardar la privacidad, la confidencialidad y sancionar la violación de los secretos profesionales. Algunos profesionales tienen el deber moral o jurídico de no revelar ciertos datos de su cliente, ya que tiene su fundamento en la defensa de la intimidad del depositante del secreto. La vulneración del llamado secreto profesional es un atentado contra la vida privada. En el caso de los periodistas no pueden revelar públicamente sus fuentes de información recibidas en confidencia.

La intimidad es la esfera personal de cada uno, en donde residen los valores humanos personales, siendo un derecho fundamental para el desarrollo de la persona y de la familia además de ser un ámbito reservado a la curiosidad de los demás contra intromisiones ajenas. El art. 19 de la Constitución Nacional contempla el derecho a la intimidad cuando dispone que *“las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”*

La intimidad se ha protegido siempre en forma limitada, por ejemplo la violación de la intimidad domiciliaria.<sup>2</sup>

En el caso de los personajes públicos, esta intimidad debe de estar mayormente protegida al estar dentro del panorama de personajes conocidos más o menos por la sociedad. Porque comentarios o noticias realizadas de forma injuriosa pueden gravemente perjudicar su imagen pública creando una imagen irreal y distorsionada de la realidad. Aun cuando lo publicado sea totalmente verídico, no por eso se puede permitir la intromisión de cualquier persona ya que se rompería con la intimidad con la que todo ser humano tiene y necesita.

El derecho a la privacidad en definitiva es aquel que garantiza a todas las personas a decidir por sí mismas acerca de quieren hacer con su vida, constituye un ámbito de autonomía individual que está compuesto por sentimientos, hábitos, costumbres, relaciones de familia, situación económica, creencias religiosas, salud mental y física; siempre que esa autonomía no ofenda de ningún modo al orden o la moral pública ni perjudique a terceros. Tal como lo vemos reflejado en el art. 19 de la CN, la protección a la que hace referencia es a las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, y que las mismas están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Con ello vemos reflejado la amplitud de libertad de acción que nos otorga nuestra constitución en el ámbito privado y el resguardo a dichas acciones frente a que no pueden ser juzgadas mientras no ofendan la moral ni el orden público ni ofendan a terceros. Incluso en los casos señalados y conocidos de personajes público este derecho a la intimidad se ve mayormente vulnerado ya que el sujeto es víctima de intromisiones o invasiones a su privacidad de manera continuada, y es aquí donde hay que proteger esos datos de la vida íntima del sujeto que deben permanecer fuera del ámbito de interés público y deben difundirse sólo aquellos datos que estén relacionados con la función que el sujeto cumple y por lo que se convirtió en un personaje público.

Más allá de la distinción efectuada, sin importar la condición del sujeto si es una persona publica, personaje célebre o no, a toda persona se le debe respetar su intimidad, su privacidad y nadie debe entrometerse en la vida privada de otra persona sin su consentimiento. -

El derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en la Constitución Nacional (artículos 14 y 32), así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4), entre otros instrumentos con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la CN).

La sociedad democrática, dice Puerta<sup>3</sup> “implica necesariamente, en todo caso, la plena participación del ciudadano en la gestión de los intereses públicos, sobre la base del principio de igualdad, del respeto al pluralismo ideológico y del sometimiento de todos al imperio de la ley, como expresión nacional de la voluntad general, en cuanto reguladora de la pacífica convivencia ciudadana”. La información pública es un proceso de interacción entre los sectores dirigentes y la ciudadanía. La opinión pública cristaliza a medida que los ciudadanos van recibiendo información sobre un proceso específico y sus alternativas de solución.

En el análisis de la libertad de información hay un doble aspecto, el de recibir información y el de emitir información. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de

---

<sup>2</sup> Art.225 al art. 231 del Código procesal Penal de la Nación. -

<sup>3</sup> Luis Román Puerta, “Libertad de expresión y opinión pública”, XII Jornadas de Estudio, ministerio de Justicia, 1992

expresión, esto comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

La libertad de expresión constituye uno de los derechos de mayor relevancia y estudio no solo en el esquema de nuestra Constitución Nacional sino también en el esquema previsto por la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma”<sup>4</sup>

Como resultado de la propia evolución histórica, los derechos comprendidos al amparo de la libertad de expresión, han crecido paulatinamente. Mientras que en el art. 14 de la CN se habla sólo de “publicar las ideas por la prensa”, la Convención Americana de Derechos Humanos entiende que ese derecho puede ser dividido en tres especies distintas: el derecho de informar, el derecho de informarse y el derecho a buscar información. La Convención contempla al más amplio número de beneficiarios.

Identificados los beneficiarios del derecho, el paso siguiente consiste en discernir en torno al contenido de aquél y los medios a través de los cuales el mensaje puede ser difundido. Al tiempo en que fue redactada la Constitución Nacional, naturalmente, resultaban ser muy pocos los medios de expresión públicos existentes, la palabra oral y la palabra impresa (diarios, libros). Los instrumentos internacionales de derechos humanos, más cercanos en aparición en el tiempo y conscientes del impacto tecnológico acaecido en las comunicaciones modernas, ampliaron la protección del ejercicio del derecho a una pluralidad de medios donde no sólo se contemplaba la palabra, sino también la imagen y el sonido.

La doctrina que emana de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es congruente con este alcance que hace así mucho más extenso el significado del concepto *prensa* previsto en la CN.<sup>5</sup>

La Convención establece como principio la prohibición de la censura previa por cualquier medio, ya sea en forma directa o bien a través de vías indirectas. La única excepción prevista a la prohibición precedente se encuentra contemplada en el mismo artículo de la Convención y sólo se permite ser interpretada en un sentido muy limitado. En tal sentido sostiene que los entes estatales respectivos podrían realizar una calificación previa de una película, obra o programa televisivo como apto u no apto para menores de determinada edad, pero en ningún caso podrían sugerir ni imponer cortes o modificaciones bajo el pretexto de la mencionada excepción de censura previa.<sup>6</sup>

En el ámbito de la jurisprudencia local, se destaca el fallo “Verbitzky”<sup>7</sup> en el que la Corte Suprema dejó sin efecto la prohibición de publicar en un diario una solicitada de contenido político, dejando a salvo el derecho de los afectados, para obtener responsabilidades subsiguientes a la publicación. También existen formas más sutiles en que puede afectarse la libertad de expresión en los medios de comunicación, y ésta se relaciona con los abusos, por parte de las autoridades públicas, del poder financiero, así como con otras interferencias basadas

---

<sup>4</sup> Corte IDH, OC 5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, del 13-11-85, párr.70.

<sup>5</sup> CSJN, Mallo, Daniel s/amparo, 1972 Fallos, 282:392.

<sup>6</sup> Ekmedjian, Miguel Angel, Derecho a la información, libertad de expresión, concepto constitucional de prensa, Buenos Aires, Depalma, 1966, pág. 30.

<sup>7</sup> CSJN, Verbitzky Horacio y otros s/denuncia apología del crimen, 1989, Fallos, 312:916.

en contenidos, que equivalen a lo que se denomina censura indirecta. Dichos abusos ejercen efectos intimidatorios muy serios y extendidos sobre la libertad de los medios y el debate democrático general tanto a nivel local como nacional.

El abuso de la libertad de expresión, si bien no puede ser objeto de medidas de control preventivo, si por el contrario puede ser fundamento de responsabilidad ulterior para quien lo haya cometido. EL art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé en forma explícita la posibilidad de que el Estado, en ejercicio de su poder reglamentario, pueda establecer válidamente normas internas que regulen la responsabilidad en la medida de que se reúnan varios requisitos. En primer lugar, establecer en forma expresa y taxativa, las causales que configuran tal abuso; y en segundo lugar, es imprescindible atender a la legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas.

En el ámbito local, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido bastante clara en el establecimiento de responsabilidades a la prensa en tanto exceda sus límites y cause un perjuicio a los derechos individuales, ya sea afectando su dignidad, honor o su intimidad. Los abusos que se cometan injuriando o calumniando, en el ámbito penal, quedarán tipificados como delitos y en el ámbito civil darán lugar a que se valore la reparación del perjuicio que se haya podido ocasionar. Así vemos como la CSJN en el caso “Campillay”<sup>8</sup> confirma el resarcimiento por el daño moral solicitado a los propietarios de los diarios “La Razón” y “Diario Popular” a raíz de una serie de publicaciones que involucraban al actor erróneamente en un hecho policial. La Corte exige *veracidad objetiva* en la transcripción de la fuente aunque la noticia en sí misma fuese falsa total o parcialmente errónea.

El segundo criterio tomado por la Corte Suprema se refiere a la aplicación de la doctrina de la real malicia en los casos vinculados con el honor de los funcionarios públicos. La regla presenta básicamente una ponderación de los intereses del honor y la libertad de prensa, que consiste en establecer que las reglas del derecho civil de daños no se aplican, aunque haya existido un daño efectivo al honor, si esa aplicación puede perjudicar el margen del ejercicio futuro de la libertad de prensa. Entiende que si se exigiera acabada prueba de toda crítica a la actuación de los funcionarios públicos, se podría caer rápidamente en el peligro de desalentar el debate libre y abierto de los temas de interés público.

En el ámbito del derecho civil, en la relación de conflicto entre el derecho a la privacidad por un lado y el derecho a la libertad de expresión por el otro, la Corte ha sentado un inequívoco precedente en el que asegura la existencia de la autonomía individual jurídicamente protegida y delimitada por un conjunto de sentimientos, hábitos y relaciones de diversos matices y frente a la cual, aún tratándose de personas públicas, no cabe la intromisión de los medios de prensa sin incurrir en una violación al derecho a la intimidad<sup>9</sup>.

### **III- CONCLUSION**

El derecho a la libertad de expresión lo vemos ligado necesariamente a uno de los pilares fundamentales del sistema de gobierno democrático y es por eso que la evolución histórica de este derecho va de la mano del contexto histórico y crecimiento de los distintos sistemas de gobiernos en los diferentes países. La protección del derecho a la libertad de expresión la encontramos no sólo en nuestra Constitución Nacional sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos y es aquí donde su evolución y aplicación a numerosos casos

---

<sup>8</sup> CSJN, Campillay, 1986, Fallos, 308:789.

<sup>9</sup> CSJN, Ponzetti de Balbin, Indalia c/ Editorial Atlántida SA, 1984, Fallos: 306:1892.

hizo que este derecho se vea cada vez menos restringido y, en consecuencia, mayormente protegido. Si bien en la CN se refiere, precisa y expresamente a una de las modalidades de la libertad de expresión, la que se concreta a través de la prensa, si tenemos en cuenta que en ese momento al dictarse la Constitución la única prensa que existía era la escrita, ya que no existía ni radio ni televisión, es de suponer de cualquier manera que el espíritu de la misma contempla a sus demás variantes.

Nuestra legislación dio importantes pasos hacia la plena protección de la libertad de expresión. La despenalización del desacato y las calumnias e injurias marcó antes y un después muy importante para la legislación de otros temas. También se reconoció la vigencia del derecho a la libertad de expresión en Internet conjuntamente con resoluciones de las Naciones Unidas en este sentido.

Uno de los mayores problemas se genera cuando el derecho a la libertad de expresión entra en conflicto con la intimidad de las personas ya que la ley no ampara el ejercicio abusivo de un derecho; no existen derechos absolutos. Teniendo en cuenta nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales lo que se trata de evitar al proteger de manera amplia la libertad de expresión, es la censura previa, dejándose asentado también que no se incluyen dentro de estos las responsabilidades ulteriores que puedan surgir del ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión, ya que de hacerlo se daría lugar a una forma de censura indirecta con persecuciones a medios periodísticos y las indemnizaciones que implican los daños y perjuicios ocasionados.

En el ejercicio de algunos derechos vemos en varias ocasiones el conflicto en el goce de los mismos, generando una discusión histórica acerca del valor o jerarquía de los distintos derechos que forman el conjunto de los denominados "*Derechos Humanos*". Uno de los mayores conflictos se generan cuando se presenta la puja entre el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la intimidad de las personas. La ley no ampara el ejercicio abusivo de ningún derecho, como señala nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, no existen derechos absolutos, pero lo que si debemos establecer a fin de solucionar éstos conflictos es un criterio claro a la hora de resolverlos. Hay ciertas informaciones que generan cierta tensión, son aquellas en las que no se tiene claro su veracidad o que pueden interferir en la esfera íntima de terceros. Ante éste tipo de situaciones debe existir algún tipo de criterio que permita saber como brindar este tipo de informaciones y hasta donde pueden informarse determinados temas. Para el caso de informaciones inexactas que generan el daño al honor de las personas tenemos afianzadas las conocidas jurisprudencias de las doctrina "*Campillay*" y la de la "*real malicia*", donde en la primera vemos como queda exento de responsabilidad quien informe utilizando un tiempo verbal potencial o reservando la identidad de los implicados; y en la segunda creada en Estados Unidos y adoptada por la Corte Suprema en diferentes fallos donde se exime de responsabilidad a las expresiones inexactas o falsas referidas a funcionarios públicos respecto del ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, el conflicto central entre éstos dos derechos fundamentales lo vemos en su máxima expresión cuando el sujeto que ve vulnerado el derecho a la intimidad es un personaje público, ya sea por el cargo que ocupa como los funcionarios públicos o las figuras públicas o personajes célebres.

#### **IV- PROPUESTA**

- 1) Es aquí donde la Corte Suprema debe tener un criterio uniforme y otra facultad en cuanto a la resolución de los casos estableciendo que en el desarrollo de la actuación pública o privada de los personajes públicos o célebres debe protegerse el derecho a la intimidad pudiendo divulgarse solo información relacionada a la actividad que les confiere prestigio o popularidad o notoriedad, siempre que se justifique el interés general. El derecho a la libertad de expresión de ningún modo debe autorizar a dañar la imagen pública ni el honor de dichas personas. No hay dudas de que la vida íntima de un sujeto tiene que permanecer fuera del interés público y sólo podrá difundirse si hay un interés público ya que está relacionado con la tarea que desempeña el sujeto en la sociedad.
- 2) Es necesario buscar un equilibrio de modo que sean compatibles el ejercicio de ambos derechos a fin de que ello no cause un perjuicio a los derechos de los demás.
- 3) Proporcionar un sistema de denuncias cuando se vulnere alguno de estos derechos que sea eficaz y se logre también prevenir estos casos.-

#### **BIBLIOGRAFIA**

- ALONSO REGUEIRA, Enrique: “La Convención Americana de Derechos Humanos y su Proyección en el Derecho Argentino”, La Ley, 2013.
- BADENI, Gregorio “Doctrina de la Real Malicia”, Buenos Aires, 2005.
- BERLIN, Isaiah: “Dos conceptos de Libertad”, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza Universidad, 1988.
- BERTONI, Eduardo: “Libertad de expresión en el Estado de derecho”, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2000.
- BIDART CAMPOS, Germán J.: “Manual de la Constitución Reformada”. Ediar 1996-1997.
- Constitución Nacional Argentina.
- Convención Americana de Derechos Humanos.
- GELLI, María Angélica: “Constitución de la Nación Argentina Comentada y concordada”. La Ley, 2009.
- HERCE DE LA PRADA, V., “El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión”, Barcelona, Ed. Bosch, 1994.
- SANCHEZ, Patricia Silvia: “Derecho a la información. Una ardua cuestión frente a otros derechos constitucionales: derecho a la intimidad y derecho al honor”, Revista del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, 2001.



